

3

El complot de los patrones

El paro de octubre pasado ha sido el intento de mayor envergadura para impedir la consolidación y el avance de los trabajadores en la dirección del país. Sus efectos inmediatos produjeron una pérdida superior a los doscientos millones de dólares.

*Tercer mensaje presidencial al
Parlamento, de Salvador Allende,
21 de mayo de 1973.*

El 15 de agosto de 1971, el diario «La Nación» de Santiago traía una entrevista con un obrero de la industria textil Yarur S.A., una de las empresas monopólicas de esa rama, corazón del imperio, oligárquico de los Yarur, grupo dueño del Banco de Crédito e Inversiones; industrias químicas, textiles y de alimentos; y empresas de distribución y de finanzas, en sociedad con el grupo norteamericano Rockefeller a través del Chase Manhattan Bank. La industria había sido requisada por el Gobierno para cumplir «la meta anual» en ese aspecto, que señalaba la expropiación de las empresas del cobre, hierro, salitre, de la banca privada y de la industria textil y del cemento, además de algunas empresas de distribución. La Contraloría General de la República, bajo presión del grupo Yarur y del Chase Manhattan Bank, había dicho que «la requisición es ilegal».

Pues bien, el obrero de la industria Yarur S.A. respondía lo siguiente:

«No nos importa si la requisición es legal o no, nosotros no entregaremos la industria. Ni la Contraloría ni la Corte Suprema nos harán volver atrás. Los trabajadores tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y no estamos dispuestos a seguir siendo

explotados. Una cosa es lo que puedan decir los tribunales y otra muy distinta lo que hagamos nosotros... El Gobierno popular nos ha dado la posibilidad de tomar decisiones en la empresa que trabajamos. Nuestro objetivo es seguir adelante, incluso pasando por sobre la legalidad.»

Eso reflejaba un estado de ánimo popular muy definido.

En la primera semana de septiembre del mismo año, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Orlando Sáenz (ingeniero comercial, 40 años, empresario-gerente en la industria metalúrgica), leía en sesión de directorio un «alarmante informe» del servicio de estadísticas del cuerpo de Carabineros que señalaba cómo los obreros y campesinos estaban «barriando» la «legalidad» y ocupaban predios agrícolas e industrias para hacer valer sus derechos salariales y, en algunos casos, para obligar al Gobierno a expropiar monopolios con cuyos dueños tenían acuerdo verbal de no expropiación. Para establecer una referencia, el informe apuntaba:

En el año 1969, hubo 118 ocupaciones de predios agrícolas; en 1970, último año de la Administración Frei, la cifra subió a 365 ocupaciones; pero ahora, en los primeros ocho meses de 1971, los campesinos han ocupado 990 predios agrícolas... ¡Cuatro ocupaciones por día!

En el campo industrial ocurría lo mismo. En 1969, había habido 23 ocupaciones de industrias por obreros en huelga; en 1970, esta forma de lucha de los trabajadores había elevado a 133 las ocupaciones; y en 1971, en los primeros ocho meses del año, las ocupaciones habían subido a 513 industrias... ¡Un promedio de más de dos ocupaciones diarias!

Para Orlando Sáenz y los directores de la organización de los oligarcas industriales chilenos, esto era una grave señal de que «no se podrá evitar el caos social» tratando de influir en la política económica y social del presidente Salvador Allende. Orlando Sáenz dijo que «nuestros intereses están amagados, y nosotros somos el corazón de la economía nacional, por lo tanto son los intereses de Chile los que están en peligro».

El análisis de la situación, en verdad, era inquietante para el reducido grupo de oligarcas industriales, comerciales y financieros del país (un total de no más de 1000 personas que eran las dueñas de más del 60 % del aparato productivo nacional). Ellos habían aceptado, en principio, influidos por algunos generales de las Fuerzas Armadas, «sacrificar» una parte de su poder económico para «salvar al sistema». Pero los hechos de los pri-

meros once meses de Gobierno de Allende mostraban que aunque el Presidente trataba por todos los medios de cumplir con lo pactado en octubre de 1970 respecto a su programa de transformaciones, la organización popular iba más allá que ellos (no conocía esos compromisos tampoco) y presionaba por el cumplimiento total del programa, que era la «expropiación del poder económico del imperialismo norteamericano y de la oligarquía nacional».

Para la Sociedad de Fomento Fabril «ya era tiempo de poner atajo a esta situación». Orlando Sáenz se puso en contacto con Benjamín Matte, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (organización gremial de los latifundistas) y con Jorge Fontaine, presidente de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio (y perteneciente al clan oligárquico de «El Mercurio»). Todos estuvieron de acuerdo, junto con los miembros de los directorios respectivos, que era necesario «poner a Allende contra la pared», partiendo de una campaña gigantesca de publicidad para quitar el apoyo de las masas al Gobierno, y después cambiarlo «constitucionalmente» antes de que cumpliera su período reglamentario de seis años.

Para poner en práctica la ofensiva anti Gobierno, Orlando Sáenz y sus asesores contaban con una realidad económica muy clara que les daba una tremenda capacidad de maniobra:

La Unidad Popular había logrado reducir el ritmo inflacionario (de un 32,5 % en 1970, cerraría con un 20,1 % en 1971) gracias a una política de «reactivación económica» que consistía en el control de precios, la puesta en marcha a toda capacidad del aparato productivo interno, y el alza de sueldos y salarios bajos a niveles superiores al índice de inflación, y de los sueldos altos a niveles iguales al índice de inflación.

Esta reactivación económica llevaba en sí un peligro muy serio, en una economía de estructura monopólica y dependiente como es la chilena. Al llegar a su límite de expansión, si no existía paralelamente una gran acumulación de capital, podía haber desabastecimiento de productos (por el exceso de demanda) y la consiguiente alza de precios vía mercado negro, lo cual volvía a poner el dinero de sueldos y salarios en manos de la oligarquía, como había sido tradicional.

Al mismo tiempo, la política de limitación de precios, al ser hecha teniendo como base los costos de las grandes industrias monopólicas, de mucho mayor productividad, dejaba a éstas con un «margen de ganancias razonables», mientras golpeaba dura-

mente a las pequeñas y medianas empresas, con costos más altos por su menor productividad.

La única salida para este callejón económico, desde el punto de vista del programa de la Unidad Popular, era la constitución de una poderosa área de propiedad social, que traspasara los monopolios en manos privadas al Estado. Con ello se podía cambiar la estructura de producción de todo el sistema (evitando el desabastecimiento), y limitar los precios con los costos de producción de pequeños y medianos empresarios, porque así el «sobreecedente» captado por los monopolios, ya no en manos privadas, sino estatales, podía ser revertido a todo el sistema en forma de mayor acumulación de capital y servicios sociales, mejorando el *status* de los sectores más bajos de la población.

Pero ocurría que el área de propiedad social había sido limitada desde un comienzo en su tamaño, por el compromiso de Allende. Al mismo tiempo, los empresarios privados habían restringido su acumulación de capital (se terminaría 1971 con 11 % de baja en la reinversión privada). Por otro lado, la limitación de precios tenía al borde de la bancarrota a muchos empresarios pequeños y medianos, y ya en septiembre se comenzaba a sentir los efectos del desabastecimiento en todo el sistema y la aparición del mercado negro.

El equipo de la Sociedad de Fomento Fabril planificó entonces, en varios puntos, el modo de destruir la plataforma popular del Gobierno de Allende:

- 1) Impedir por todos los medios la formación del «área de propiedad social» más allá de un límite que la hiciera inocua como directora de la economía nacional. Para ello se encargó a Eduardo Frei que se las arreglara para presentar un proyecto de reforma constitucional en el Parlamento (donde había mayoría de los partidos manejados por la oligarquía y el imperialismo yanqui). La tarea se encargó al senador demócratacristiano Juan Hamilton, en compañía de su colega de partido y de parlamento, Renán Fuentealba. Con esa reforma constitucional se pretendía «congelar legalmente» la formación del «área de propiedad social», nervio motor indispensable de todo el programa de la Unidad Popular.

- 2) Conseguir el apoyo de los pequeños y medianos empresarios (104.000 en el comercio al detalle, 34.000 en la industria y unas 150.000 familias en la agricultura), planteando las banderas de lucha de «mejores precios para los productos», seguridad

contra «las expropiaciones» (cosa que nada tenían que temer por supuesto, estos pequeños y medianos empresarios) y «comercialización» sin control estatal. Todo lo cual beneficiaba doblemente a los monopolios privados.

3) Luchar contra toda forma de organización popular que apoyara al Estado en su control de precios (Juntas de Abastecimientos y Control de Precios), control de la producción (Comités de Vigilancia de la Producción, etc.) y control de las actividades conspirativas de la reacción (Comités de Unidad Popular, que fueron desarticulados por la misma Unión Popular como concesión a la reacción en el período septiembre-octubre de 1970, describiéndolos como «organizaciones del marxismo dictatorial» para «estrangular la democracia»).

4) Promover la restricción en las inversiones privadas y el volcamiento del capital especulativo hacia el mercado negro (en 1972 y 1973 se destinaron más de CIEN MILLONES DE DÓLARES a este negocio por parte de los oligarcas), con el fin de desatar una inflación incontrolada, el consiguiente caos económico y la pérdida total de apoyo de masas al Gobierno.

5) Campaña de propaganda intensiva para demostrar que el quiebre de la economía era «el fracaso del socialismo», ocultando la cuestión central de falta de inversión y de capacidad de planificación y control del propio aparato estatal burgués para resolver la crisis «a favor de los sectores de menores recursos», en vez de hacerlo «a favor del sector monopólico privado chileno y extranjero».

6) Darse un plazo de unos siete a ocho meses (a partir de octubre de 1971, fecha de inicio de la campaña) para llegar a una situación política de deterioro ostensible del apoyo de masas al Gobierno, exigir un plebiscito para que el presidente Allende lo pierda y se rinda a los requerimientos económicos de la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Confederación de la Producción y el Comercio.

Para poner en práctica estos seis puntos, se contaba con un poder económico y político de la oligarquía casi intacto (habían traspasado a manos del Estado, previo pago de acciones, menos de la cuarta parte de sus empresas), con mayoría en el Parlamento, con influencia total en el Poder Judicial y la Contraloría General de la República; con periódicos que significaban más del 80 % de la circulación diaria en todo el país, con radio-emisoras que concentraban más del 50 % de la sintonía nacional, y con una estación de televisión en Santiago que acaparaba más

del 60 % de la sintonía; por último, también contaban con lo más importante: «la neutralidad de las Fuerzas Armadas».

Los generales «reformistas», a través de Orlando Urbina Herrera y Washington Carrasco, habían hecho saber a Orlando Sáenz y sus asociados, que «si ustedes quieren cambiar de presidente como la Constitución lo permite, con plebiscito, entonces estamos de acuerdo, no entrabaremos esa acción». Los generales «constitucionalistas», a través de Augusto Pinochet, habían hecho saber lo mismo. Y los generales «duros» apoyaban el plan porque tenía que ver exactamente con lo que ellos planteaban desde septiembre de 1970.

Sin embargo, los generales «reformistas» insistieron en que ellos estimaban que «había un error de apreciación» en lo acordado por la Sociedad de Fomento Fabril. Que todavía no era tiempo «de entrar en temores», que la capacidad de Allende, su «muñeca política» como él mismo la llamaba, no estaba agotada para «calmar a los trabajadores y hacerlos entrar en razón».

Los dirigentes políticos del Partido Nacional, encabezados por Onofre Jarpa y los senadores Pedro Ibáñez y Francisco Bulnes, más los diputados Patricio Phillips y Fernando Maturana y el grupo de Eduardo Frei de la Democracia Cristiana, compuesto principalmente por su ex ministro de Defensa, Juan de Dios Carmona, los senadores Juan Hamilton y Patricio Aylwin y el empleado del grupo Yarur-Rockefeller, Felipe Amunategui Stewart, son los que recibieron el encargo de la Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura y Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, de poner en marcha la campaña.

El día primero de octubre de 1971, la Sociedad de Fomento Fabril abrió el fuego al publicar un comentario sobre la gestión de la Unidad Popular, dando «un balance sobre los resultados alcanzados: el Gobierno profundamente afectado en su prestigio y expuesto a un juicio político; importantes sectores industriales vejados y damnificados en sus derechos; una opinión pública desconcertada y perpleja; y lo que es peor: ninguno de los objetivos buscados logrados».

Las ollas vacías

En noviembre de 1971 ya estaban desatados todos los efectos de desabastecimiento producidos por la redistribución de ingre-

sos en los sectores más postergados de la sociedad chilena y la falta de flexibilidad del sistema productivo, de carácter capitalista y dependiente, que funcionaba con un criterio selectivo de consumo para las capas altas en cantidad más que suficiente y de déficit de consumo para gigantescos sectores de obreros y campesinos.

Las cifras preliminares de noviembre, decían que el consumo de aves, porcinos y patatas había aumentado en ese año en 16 %, 18 % y 55 %, respectivamente. El consumo de azúcar aumentaba en un 37 %. Pero el aparato productivo había tocado su techo, y la escasez de esos mismos productos en el mercado afectaba a amplios sectores de empleados, pequeños y medianos, empresarios y que no estaban en el circuito de abastecimiento popular directo a través de sindicatos y federaciones de sindicatos.

En Santiago, principalmente, las colas de personas para conseguir una vez a la semana, o una vez cada quince días carne de ave o azúcar, eran impresionantes. El mercado negro de esos productos comenzaba a aparecer.

El 4 de noviembre, en la celebración del primer año de Gobierno, el presidente Allende pronunció un discurso ante unas ochenta mil personas, y se refirió al tema:

«Ha habido escasez transitoria de algunos productos, por el mayor poder de compra de las masas, por la tendencia al acaparamiento de ciertos sectores que compran más de lo que necesitan. Si necesitan tres o cinco kilos de carne, y la encuentran en venta, compran diez o doce, y la guardan en su refrigerador. Hay una presión psicológica que hace que la gente compre más de lo que necesita. Y también debemos reconocer que hay especulación en los barrios... En el caso de la carne, por otra parte, al comienzo de nuestro Gobierno salieron de las fronteras de Chile más de doscientas mil cabezas de ganado vacuno.»

«La presión psicológica» corría por cuenta de los medios de comunicación de masas, propiedad de los monopolios privados y de sus partidos políticos, que tenían en marcha una campaña de noticias destinadas a crear pánico de compra en la población.

En el mismo discurso, Allende trató de disuadir a centenares de miles de campesinos, obreros y empleados que viendo a los monopolios privados seguir mandando en la economía, buscaban como salida el ocupar las empresas monopólicas sorprendidas en acaparamiento, exigir su expropiación y ocupar los predios de los latifundistas que, por otra parte, servían de campo de adies-

tramiento para grupos fascistas, asesorados por expertos militares de la Infantería de Marina, de la Fuerza Aérea, de la Escuela de Paracaidismo y Fuerzas Especiales del Ejército. Allende llamaba a eso «tomas indiscriminadas» para caratularlas de «extremismo de izquierda».

Dijo Allende: «Es por eso que no aceptamos la presión, lo hemos dicho con honradez de revolucionarios. Estamos contra todas las tomas indiscriminadas de fondos que crean anarquía en la producción y que terminarán por lanzar a los campesinos contra campesinos o a los campesinos contra pequeños agricultores... Estamos contra las tomas de vivienda que perjudican a los trabajadores que juntaron sus cuotas para adquirirlas. Estamos contra las tomas de las pequeñas y medianas fábricas por los obreros; la estatización y la requisición de las empresas deben obedecer a un plan de Gobierno y no a la anarquía del impulso voluntario de unos cuantos.»

Es notable comprobar cómo, nunca en los tres años de Gobierno, ni Salvador Allende ni las directivas de los partidos comunista y socialista, estuvieron de acuerdo con la enorme movilización de las masas que pugnaban por salir adelante en su lucha contra la oligarquía y el imperialismo de los Estados Unidos. Siempre frenaron, en la medida de sus fuerzas, las manifestaciones de «sabiduría política instintiva de los trabajadores», que trataban de obligar a Allende y la Unidad Popular a expropiar de una vez a las principales empresas monopólicas industriales, auténtica llave maestra de todo el plan económico de Gobierno, para poder cambiar la estructura de producción del país. En 1971, esto era posible, aun en el caso de hacerlo al mismo tiempo de ceder en «negociaciones largas para ganar tiempo» con la Anaconda y la Kennecott. Pero la ocasión fue desperdiciada por el afán de Salvador Allende de «mantener tranquilas a las Fuerzas Armadas», incluso sabiendo que en aquella época su cohesión era muy frágil y no estaban de ninguna manera en buena posición para intentar un golpe insurreccional con posibilidades de victoria. Probablemente, si la movilización de las masas se hubiera alentado y organizado en vez de desarticulado y frenado, el «frente de lucha antiimperialista y antioligárquico» hubiera tomado una dimensión tal que hubiera sido imposible para las Fuerzas Armadas chilenas y el imperialismo norteamericano salir en defensa del antiguo orden económico.

Pero volvamos al desabastecimiento. Durante todo el mes

de noviembre de 1971 las directivas de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional promovieron una manifestación pública para expresar «la protesta del pueblo por el hambre que aflige a nuestros hogares».

En la tarde del 2 de diciembre, desde el barrio alto de la ciudad de Santiago, donde se concentra el 90 % de las personas que más ingresos económicos tienen en Chile, se descolgaron unas cincuenta mil mujeres, flanqueadas por jóvenes de los grupos de choque de la Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la naciente organización fascista Patria y Libertad. La abrumadora mayoría de estas mujeres eran las esposas de gerentes, altos ejecutivos y empresarios grandes y monopólicos, además de empleados de alto nivel de renta. Eligieron como símbolo del desfile ollas vacías y cucharas. Cada manifestante portaba una olla vacía, de aluminio, y una cuchara. Golpeando una con la otra, el ruido era ensordecedor y atemorizante. Así, tronando, las mujeres del barrio alto de Santiago bajaron hasta el centro de la ciudad y, provocando un enfrentamiento con los carabineros quisieron rodear el Palacio de La Moneda. El enfrentamiento se produjo. Y durante dos o tres horas, al anochecer de ese día, todo el barrio central fue escenario de una batalla campal entre la policía militarizada y las mujeres manifestantes.

En aquella tarde, el autor de este reportaje vio el «embrión» de lo que sería más tarde, a partir del 11 de septiembre de 1973, la más increíble ferocidad desatada de un ser humano sobre otro. Mujeres muy bien vestidas, de hermosas figuras y delicado caminar, que uno había visto siempre en los estrenos de gala del cine o del teatro, o en los comedores de restaurantes elegantes limpiándose delicadamente la boca, gritaban desaforadas por las calles las groserías más increíbles contra el presidente Allende. Una de esas frases: «Allende maricón, ya no sirves ni para el colchón.» Vi a varias de ellas echarse encima de jóvenes que gritaban: «Viva Allende», golpearlos con las ollas y, en un caso, después de tener atrapado a un niño de unos 15 años, dos mujeres, una de las cuales llevaba un collar de perlas, lo sujetaron contra el suelo, le reventaron los pantalones por la cintura, se los bajaron y comenzaron a golpearle en los testículos mientras una chillaba: «Cámpemos a este hijo de puta» y se esforzaba por sacarle los genitales por entre los calzoncillos. La llegada de una patrulla salvó al niño.

Esta horrible brutalidad en ciernes mostrada por las mujeres del barrio alto el 2 de diciembre de 1971, tomaría una dimensión apocalíptica a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando decenas de miles de hombres, mujeres, ancianos y hasta niños fueron torturados con un salvajismo sin límites, llegando al extremo de la violación en grupo de prisioneras y de la castración de prisioneros por las Fuerzas Armadas, por simple distracción, a la voz de «bajémosle la moral a estas mierdas marxistas».

La marcha de las ollas vacías obligó a Allende a declarar «zona de emergencia» la ciudad de Santiago, que quedó bajo jurisdicción militar por algunos días. Había sido la primera etapa de la campaña para tratar de derrocar a Allende «por medios legales».

El área social

El 9 de febrero de 1972, la mayoría demócratacristiana y nacional en el Parlamento cumplió con las órdenes impartidas por la Sociedad de Fomento Fabril poco más de cuatro meses antes: aprobó una reforma constitucional para fijar las normas del «Área de Propiedad Social», cuyos autores habían sido los senadores Juan Hamilton y Renán Fuentealba. (Juan Hamilton estaba ligado a los magnates de la construcción Soza Cousiño y a los monopolistas del hierro Klein, los cuales, aunque chilenos, tenían todos sus capitales en Suiza y Canadá. Estos Klein fueron muy favorecidos por el Gobierno de Eduardo Frei, y le instalaron al ex Presidente y a otros políticos demócratacristianos una cadena de hoteles de lujo en la Costa Brava, España, como pago por esos favores recibidos.)

La «reforma constitucional» de Hamilton y Fuentealba era una verdadera bomba de tiempo: el presidente Allende estaba obligado a promulgarla porque, si no lo hacía, rompería la letra de la Constitución política, cosa que esperaban los opositores para destituirlo. Y Allende no podía promulgarla porque su texto era simplemente un congelamiento del «Área de Propiedad Social», dejándola inútil como herramienta de activación y ordenamiento del aparato productivo nacional a fin de cumplir los planes de la Unidad Popular. Una síntesis de esa reforma constitucional permite señalar los siguientes puntos:

1) Dejaba «dar en administración», por «razones técnicas», las compañías nacionalizadas del cobre a la propia Anaconda o a la Kennecott. Es decir, permitía revertir la nacionalización de un modo lateral.

2) Dejaba como «área de propiedad privada definitiva» a empresas monopólicas tan enormes como la Manufacturera de Papeles y Cartones, empresa central del grupo oligárquico Matte-Alessandri. (En Chile había once clanes oligárquicos dueños de la mayor y mejor parte de la economía nacional, en estrecha asociación con capitales de los Estados Unidos.)

3) Dejaba a salvo de expropiaciones «la distribución del petróleo y sus derivados», lo que significaba la libertad de negocio de la Esso Standard Oil, de los Rockefeller, y de la Shell, inglesa, asociándose con grupos empresariales como la COPEC, de la familia del senador Francisco Bulnes Sanfuentes, componente de otro de los once clanes.

4) Declaraba ilegales todos los traspasos de monopolios privados a propiedad del Estado anteriores al 20 de octubre de 1971, con lo cual dejaba reducida prácticamente a cero el área de propiedad social, a menos que el Parlamento aprobara esos traspasos, en discusión «caso por caso».

5) Obligaba a que el Gobierno enviara al Parlamento cada caso de nuevo monopolio a expropiar, para que esta expropiación fuera aprobada por el Parlamento. Como en el Parlamento había mayoría de la reacción, era fácil prever que el «área de propiedad social» no crearía jamás, a menos de conquistar la mayoría parlamentaria para el Gobierno en marzo de 1973, fecha constitucional para el cambio de la Cámara de Diputados completa y la mitad del Senado.

Con esta descarada defensa de los intereses monopólicos norteamericanos y chilenos, la mayoría del Parlamento pretendía poner contra la pared al Gobierno Allende. Si aprobaba la promulgación de la reforma, su esquema económico se desfondaba; si la rechazaba, se ponía fuera de la Constitución. Era la segunda etapa en la campaña iniciada por los políticos reaccionarios por mandato de la Sociedad de Fomento Fabril.

Un ministro general

Durante todo el mes de febrero, marzo y primera semana de abril, la campaña desatada por la Democracia Cristiana y

el Partido Nacional «para defender a los consumidores del desabastecimiento, el alza de los precios», el «mercado negro» y «el sectarismo de la Unidad Popular» estaba alcanzando el punto máximo. Su éxito en muchos sectores, fue notorio en las elecciones para nuevas directivas de sindicatos de empleados. En ellas los candidatos de la Unidad Popular eran derrotados por los demócratacristianos e incluso por los nacionales. Un ala del partido radical, encabezada por su ex presidente, senador Luis Bossay Leiva, que había formado el Partido de Izquierda Radical, abandonó el Gobierno y se pasó a la oposición, planteando que «no podemos aceptar ser cómplices en un proceso que tiende a salirse de la Constitución y no resuelve los problemas de las masas». Luis Bossay Leiva y demás miembros principales del PIR recibieron grandes sumas de dinero de la oligarquía para «formar el partido».

El 6 de abril, Allende respondió con un golpe de efecto. Reorganizó su Gabinete, con la novedad de nombrar ministro de Minería a un general de brigada en servicio activo, Pedro Palacios Camerón. Con esto, Allende pretendía mostrarle a los opositores que planteaban ya «la resistencia civil», que tenía «en un puño» a las Fuerzas Armadas; y como sucede en todo régimen de dominación de una clase sobre otra, quien tiene las Fuerzas Armadas es la clase que domina. Sólo que en Chile parecía haber un contrasentido bastante grave: las Fuerzas Armadas eran de la burguesía, y el Gobierno de Allende pretendía ser del proletariado. ¿Cómo podían estar apoyando las Fuerzas Armadas de una clase al pretendido dominio de otra?

Cuando en los primeros días de abril de 1972 Allende planteó al general Carlos Prats González la necesidad de incluir a un militar en servicio activo en el nuevo Gabinete, éste le respondió que lo consultaría con su cuerpo de generales. Los generales «reformistas» estuvieron de acuerdo con los «constitucionalistas» en que era bueno aceptar este ofrecimiento, por un tiempo corto, para que «uno de nuestros hombres se adiestre en esas tareas». El general Palacios fue nombrado en Minería, precisamente donde más les interesaba a los generales «reformistas», para conocer todo el detalle de la organización, administración y ejecución de la minería del cobre nacionalizada.

Sin embargo, la discusión entre los generales para aceptar este ofrecimiento no fue tan simple y sin problemas como parece. Hacía menos de treinta días que un par de altos mandos

de los llamados «duros» había cometido la torpeza de intentar una insurrección militar sin consultar con el Estado Mayor, provocando que los Servicios de Inteligencia de la Unidad Popular los detectaran, con lo cual el alto mando encabezado por Prats no le había quedado más remedio que tomar medidas disciplinarias contra los complotadores.

Fue en marzo de ese año, en Temuco, donde se descubrió que el coronel Julio Canessa Roberts, connotado fascista, estaba articulando un aparato de sabotaje a la producción agrícola en complicidad con los latifundistas del lugar, y esperaba presentar el hecho consumado de un acuartelamiento de su regimiento en Temuco, más algunos regimientos de Valdivia y Osorno, para obligar a Allende «a respetar la Constitución». Canessa también tenía conexiones con la organización de Patria y Libertad de la zona, a la cual proveía de adiestramiento paramilitar y de armas para la práctica de tiro, al mismo tiempo que protegía el contrabando de armas automáticas calibre 22 desde Argentina, para los arsenales de Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus.

Estas actividades fueron denunciadas al presidente Allende por la policía civil, Allende las denunció a Prats, y la junta de generales acordó trasladar a Julio Canessa Roberts a Santiago, destinándolo a la Escuela de Suboficiales.

Los generales, incluyendo a Prats, sabían que Julio Canessa no era más que una pieza en un equipo más grande, formado por el general de brigada Hernan Hiriart, jefe de la División de Caballería en Valdivia, y el general de brigada Alfredo Canales Márquez, del cuerpo de generales de la guarnición de Santiago. Pero nada de esto se le comunicó al presidente Allende, quien quedó satisfecho con el traslado de Canessa; traslado que le quitaba el mando de tropas.

Por eso, al discutirse en abril la inclusión de un militar en el nuevo Gabinete de Allende, los «duros» se mostraron totalmente en desacuerdo porque «ello significaría que nosotros apoyamos a un marxista.» Prats y los «reformistas» lograron convencerlos de que el Gobierno de Allende no era marxista, y las Fuerzas Armadas quedaban en situación de retirar a su ministro, cuando fuera conveniente mostrar «repudio público y notorio» a la política de Allende.

En su discurso anual a los trabajadores, el día primero de mayo de 1972, el presidente Allende advirtió al pueblo sobre parte de lo que estaba pasando, y refiriéndose a la reforma consti-

tucional de Hamilton-Fuentealba, la definió como un intento «que anularía las conquistas alcanzadas en el campo del área social de la economía» y que «detrás de esta actitud apunta inclusive la amenaza de destituir al Presidente de la República. No me inquieta, no me inquieta en lo personal este hecho. Me preocupa porque es mi obligación defender la Constitución». Y agregó: «Lo único que me inquieta es que se barrerán las bases de la constitucionalidad chilena, que se quiere cambiar el juego y que se quiere, por lo tanto, precipitar a este país a una lucha muy dura y muy profunda». Para enseguida señalar sus «obligaciones» como Presidente, cuya enumeración desconcertó a los trabajadores que lo escuchaban:

«Es mi obligación, y la voy a cumplir, defender los preceptos constitucionales.

»Es mi obligación evitar el enfrentamiento.

»Es mi obligación rechazar toda violencia, física, económica y social.

»Es mi obligación impedir que haya un baño de sangre en Chile.

»Es mi obligación defender las conquistas de los trabajadores y la Revolución chilena.»

Pero ocurre que, cotidianamente, para los trabajadores que escuchaban a Allende, la idea de «defender los preceptos constitucionales» era una traba para ellos mismos, para su organización naciente, para impedir el sabotaje, los atentados, el mercado negro, la especulación y el abuso de los monopolistas que, a través de sus bandas fascistas adiestradas por personal de las Fuerzas Armadas, hacían día a día contra todo el aparato económico de la nación. Y los jueces, el Parlamento, la letra de las leyes y los «preceptos constitucionales» servían para defender a los saboteadores y entorpecer la labor de vigilancia y aumento de la producción de los trabajadores.

Avanzar o no avanzar

Mientras por un lado el presidente Allende decía en sus discursos que el pueblo debía organizarse en Juntas de Abastecimientos y Precios, Consejos Comunales Campesinos, Comités de Producción, Comités de Vigilancia de la Producción, etc., para «defender la Revolución»; por otro, los trabajadores veían como, a través del control de esos organismos por parte de las

directivas políticas de los partidos de la Unidad Popular, se transformaban en organizaciones para paralizar la movilización de las masas, para impedirles que se prepararan para el verdadero enfrentamiento que se veía venir: el pueblo con las Fuerzas Armadas de la burguesía y del imperialismo.

En el seno del Gobierno, había una discusión profunda al respecto. El ministro de Economía, Pedro Vuskovic (independiente de izquierda hasta ese momento, y miembro del partido socialista a partir de 1973), planteaba, como lo escribiera más tarde en un documento publicado por «Revista de la Universidad Técnica del Estado», que el meollo de las dificultades estaba «en todo lo que significa el carácter de clase del Estado burgués, dentro de cuyas características todavía vigentes han venido encauzándose las nuevas realizaciones. Toda su estructura, incluso su reflejo en el marco jurídico y hasta en la organización del aparato administrativo, se había configurado para atender a los intereses del capitalismo y la dependencia, preservar el dominio monopólico y excluir cualquier forma de acceso y participación de los trabajadores. Con ello chocan las nuevas exigencias, esterilizando gran parte de los esfuerzos y agudizando una contradicción que *sólo podrá resolverse mediante la sustitución de ese Estado burgués por la construcción de un Estado de otro carácter, de un Estado Popular*; la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas del área social, a través de su presencia decisoria en los Consejos de Administración y otros mecanismos; las formas recién iniciadas de extensión de esa presencia a los diferentes niveles de decisión administrativa; las formas todavía en germen de su control sobre el área privada; la organización de los trabajadores y el pueblo en las Juntas de Abastecimientos y Precios, para ejercer un mayor control sobre el proceso de distribución; los organismos comunales, los «cordones industriales» y muchas otras iniciativas, algunas de ellas multiplicadas en la respuesta de los trabajadores a la ofensiva reaccionaria de octubre; todas ellas constituyen otras tantas manifestaciones en esa dirección, que corresponde *profundizar y ampliar urgentemente, tanto para asegurar el carácter del proceso revolucionario como para asegurar los problemas inmediatos*».

Vuskovic planteaba (y con él una minoría de las directivas del partido socialista y el MAPU) que la única forma de impedir el colapso cuando la burguesía y el imperialismo recurrieran a «su reserva estratégica de dominio» (las Fuerzas Arma-

das) era crear «una gigantesca movilización de masas con objetivos concretos de controlar el aparato productivo y prepararse para el enfrentamiento militar entre las clases».

Y formulaba teóricamente su tesis diciendo:

«En este período, los avances en la realización del programa han sido suficientemente grandes como para motivar la más enconada reacción del imperialismo y la burguesía, pero todavía insuficientes como para privar a la burguesía nacional de la posibilidad de utilizar el poder económico que conserva en toda suerte de acciones de obstrucción y sabotaje a la economía. Ello quiere decir, entre otras cosas, que la conducción económica no se realiza en un plano de dominio político que permita concentrar la preocupación en las tareas constructivas. Por el contrario, en ella se expresa toda una lucha política no resuelta, que convierte las acciones económicas en instrumentos de esa misma lucha. De ahí que en cada problema económico que hoy se afronta no sea difícil identificar la acción deliberada del imperialismo y la burguesía».

Con mayor precisión, Vuskovic decía que la burguesía se había propuesto la tarea de hacer fracasar la política económica del Gobierno, para quitarle apoyo popular primero y derrocarlo después, porque «a pesar del número de empresas incorporadas al área social, de la estatización de los bancos y de la extensión de la reforma agraria la burguesía sigue detentando un poder económico suficientemente importante como para proponerse esta tarea con algunas posibilidades de triunfo».

Y especificaba: «Se trata, en primer lugar, de que aún no se completa el área de propiedad social en los términos previstos. Importantes actividades monopólicas o estratégicas continúan en manos de sus propietarios capitalistas, constituyendo una fuente de cuantiosos ingresos y un instrumento de dominio sobre otras empresas. En segundo lugar, el área social no ha llegado a constituirse en el sector efectivamente dominante, capaz de imponer los términos de funcionamiento y de situar en un marco general de decisiones la gestión de las empresas que, de acuerdo al programa, continúan y continuarán integrando el área privada de la economía. Tampoco se concretan en ésta, formas efectivas de control por parte de los trabajadores... En tercer lugar, no se ha logrado imponer de modo definitivo una redistribución real del ingreso en favor de los trabajadores y del proceso de acumulación».

Con estos planteamientos, el entonces ministro de Econo-

mía Pedro Vuskovic, pretendió convencer a Salvador Allende y a su principal apoyo, la directiva del Partido Comunista de Chile, de la necesidad imperiosa de «dar un salto adelante» basándose en una «gigantesca ofensiva de masas», aprovechando que «todavía las fuerzas reaccionarias y su aparato armado del Estado burgués no tienen la cohesión suficiente como para intentar una contrarrevolución armada». Si no lo hacemos ahora, se completaba la tesis, después será tarde, y la crisis económica servirá de pretexto para la insurrección armada de la burguesía y el imperialismo.

Pero, contra Vuskovic estaba el planteamiento de la directiva del partido comunista, a través de Orlando Millas y Luis Corvalán, quienes plantearon que «eso no se puede hacer. Nuestra tarea ahora es impedir que se provoque a los enemigos». De acuerdo con el presidente Allende, estimaron que era bueno «tomar en cuenta los argumentos del generalato de Santiago», que «nos han hecho saber (en mayo de 1972) que están muy preocupados por el aumento exagerado de la inflación, el desorden con que algunos trabajadores de la ciudad y el campo ocupan empresas, y la baja producción en el área privada».

El 17 de junio, el presidente Allende cambió sus ministros. Los dos hechos más destacados: la salida del ministro de Minería, general de brigada Pedro Palacios Camerón; y la del ministro de Economía, Pedro Vuskovic.

El general Palacios Camerón fue retirado del ministerio por acuerdo de los generales de la guarnición de Santiago, que estimaron, por imposición del grupo de los «duros» en combinación con los «reformistas», que «no podemos permitir un miembro de las Fuerzas Armadas en el Ministerio, cuando sabemos que el nuevo Gabinete será dominado por los comunistas «esto es una mala imagen para nuestros institutos armados, que son antimarxistas por doctrina y fundamento».

El ministro Pedro Vuskovic salió porque el partido comunista exigió el control completo de la parte económica del Gabinete para aplicar su política «de convivencia nacional». A través de Orlando Millas, que sería sucesivamente ministro de Hacienda y de Economía, la bandera del nuevo «muñequero» de Salvador Allende se resumiría en las siguientes palabras: «Para avanzar hacia el socialismo, así como más adelante para construir el socialismo, lo que debe estar en primer lugar es el desarrollo de la producción en todos los campos de la economía nacional. Nada hay sin ello».

La directiva del Partido Comunista de Chile y Salvador Allende, habían impuesto la tesis de congelar el proceso bajo el lema de «consolidar lo que tenemos, primero, para después avanzar». Pero ocurría que lo «que tenemos» era lo que definía Vuskovic: un poder económico sustancial en la burguesía, un área social de la economía inocua para poder impedir el sabotaje de la producción por parte de los enemigos del Gobierno, unas Fuerzas Armadas en constante preparación para «el asalto final al Poder» y una clase trabajadora frenada en sus ímpetus revolucionarios, desarticulada a diario por todos esos factores combinados y objeto de una relativamente exitosa campaña de propaganda de la oligarquía y el imperialismo.

Nuevo complot militar

Las fuerzas políticas, parlamentarias, judiciales y gremiales desatadas por la ofensiva planificada por la Sociedad de Fomento Fabril para llegar a la meta de derrocar «legalmente» a Salvador Allende, habían comenzado a recibir desde muy temprano el apoyo de los organismos controlados por la Agencia Central de Inteligencia en Chile. Esta ayuda no sólo procedía de los *items* «gastos varios», «gastos de representación» o «propaganda» de las grandes empresas monopólicas chilenas, sino también de empresas multinacionales como la ITT (que en mayo de 1972 fue requisada por el Gobierno por fraude tributario y por haber participado abiertamente en la conspiración de septiembre-octubre de 1970), la Anaconda y la Kennecott (que habían declarado una verdadera guerra contra el Gobierno de Allende, incluyendo el embargo de cargamentos de cobre chileno en puertos extranjeros, como comenzó a ocurrir a partir del 30 de septiembre de 1972 en Europa).

El esquema del «golpe legal» civil consistía en provocar el deterioro de la situación económica; la acción psicológica a través de los medios de comunicación de masas; una labor de penetración en las Fuerzas Armadas; y la preparación de grupos paramilitares para terrorismo de «apoyo» al deterioro económico.

Entre los grupos terroristas fascistas había dos que sobresalían por su organización y financiamiento: Patria y Libertad y Comando de Ex Cadetes. Habían tenido un origen distinto, pero, con el desarrollo de la situación, habían llegado a tener financiamiento, asesoría y adiestramiento común.

Patria y Libertad fue fundado por el abogado Pablo Rodríguez Grez, del comando de la candidatura de Jorge Alessandri en 1970. Este abogado estaba ligado por medio de Roberto Zúñiga, a los intereses financieros del grupo Matte-Alessandri, de los Edwards y de «los demócratas radicales» en contacto con la Anaconda. En Patria y Libertad figuraba el periodista Rafael Otero Echeverría, antiguo servidor incondicional del imperialismo norteamericano, que lograría infiltrarse por un corto tiempo en la agencia cubana Prensa Latina, en Santiago, robándole después dinero y equipos. Otero Echeverría, desde muchos años antes, se había integrado a la Internacional anticomunista, dirigida por la CIA, y era un protegido del grupo oligárquico de los Yarur, el cual también aportó dinero a Patria y Libertad desde sus comienzos.

Patria y Libertad fue planificada y creada como grupo fascista, bajo la directa supervisión del entonces secretario de la Embajada de los Estados Unidos en Chile, Keit W. Wheelock. Este personaje aparece en el libro-denuncia *Quién es quién en la CIA* con una serie de acciones, en diversos países del mundo, destinadas a derribar Gobiernos por cuenta de los consorcios gigantes de los Estados Unidos. Sin embargo, sus contactos con mandos de las Fuerzas Armadas chilenas no fueron los suficientes porque se estrellaron con una notoria desconfianza en el seno del Ejército, sobre todo al asumir Pablo Rodríguez, como abogado, la defensa del ex general Roberto Viaux, artífice intelectual del asesinato «por traición» del general René Schneider. Sólo la Marina, a través del grupo de Infantería de Marina, prestó apoyo al adiestramiento y provisión de armas de gran calibre a Patria y Libertad. En el Ejército, consiguieron una brecha en la provincia de Atacama a través de su jefe militar, el teniente coronel Oscar Haag Blaschke, para contrabandear armadas desde Argentina y Bolivia. En Santiago, reclutaron al coronel Roberto Souper Onfray, jefe del Regimiento Blindados Número 2.

Este grupo fascista se vinculó estrechamente a los latifundistas de las provincias sureñas, llegando a dominar la radio Sociedad Nacional de Agricultura, en Santiago, y teniendo entre sus miembros dirigentes a Benjamín Matte, presidente de ese organismo gremial oligárquico. Los oligarcas industriales, por su parte, pusieron al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Orlando Sáenz, como «miembro secreto» de la directiva nacional («jefatura», según el lenguaje de los fascis-

tas), para vigilar, sobre todo, el buen uso de los fondos que los grandes industriales ponían a disposición de los terroristas.

El segundo grupo era el Comando de Ex Cadetes, que surgió después de que el director de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, coronel Eduardo Labbé, se negó, en diciembre de 1971, a rendir honores militares a Fidel Castro, de visita entonces en Chile.

Labbé era del grupo de los «duros». Estaba estrechamente vinculado a los generales Alfredo Canales Márquez y Hernán Hiriart, y cuando se descubrieron los complots de esta gente en marzo de 1972, Labbé fue llamado a retiro.

El Comando de Ex Cadetes tenía como «contacto» con la Embajada de los Estados Unidos al periodista chileno Federico Willoughby McDonald, que desde hacía años se cubría con la fachada de «jefe de relaciones públicas de la Ford Motor Company en Chile». Willoughby McDonald, valiéndose de su condición de civil, pero al mismo tiempo estrechamente relacionado al equipo de la CIA en la Embajada de los EEUU (formado por Joseph F. Manus, Daniel Arzac, Dean Hinton, Frederick Las-trash, Keith Wheelock, Arnold Isaacs, Donald H. Wiplers, Raymond A. Warren, James Anderson y John B. Tripton), tuvo la misión de «contactarse» con altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Los mismos clanes oligárquicos que financiaban a Patria y Libertad financiaban el Comando de Ex Cadetes, sólo que este gasto era mucho menor porque este comando, al revés que Patria y Libertad, era un grupo fascista de acción, de «encargos» y de «banco de información» sobre las actividades de la gente de izquierdas. Era realmente un grupo satélite de la CIA en Chile, y fue uno de los que formó parte del «plan Yakarta», aparecido en 1973, para asesinar a dirigentes y periodistas de la Unidad Popular. En septiembre de ese año, los generales fascistas obtuvieron del Comando de Ex Cadetes una gran ayuda para buscar, ubicar, torturar, interrogar y asesinar a miles de dirigentes populares.

A mediados de 1972, se estimaba que el Comando de Ex Cadetes estaba compuesto de unos 350 miembros repartidos, principalmente, en Santiago, Valparaíso y Concepción.

En septiembre de 1972, cuando estos grupos fascistas habían comenzado a cumplir con su parte en el plan de la Sociedad de Fomento Fabril y sabotaban líneas férreas, puentes, caminos y torres de alta tensión, además de asaltar y golpear a

dirigentes sindicales y políticos de nivel medio y bajo, la situación económica se deterioraba rápidamente debido a la imposibilidad de controlar, por parte del Gobierno, la acción de los grandes empresarios privados para bajar la producción, no invertir, especular y paralizar el aparato productivo en sectores alternativos.

En esos días, la Sociedad de Fomento Fabril ya había pasado la voz a sus agentes en la Democracia Cristiana, el Partido Nacional, el poder judicial, la Contraloría y los organismos gremiales empresariales y los profesionales en manos de representantes directos de la oligarquía, que «es necesario pasar a la última etapa»: la etapa del paro general de los patrones de todo el país.

En una fiesta en Viña del Mar, una noche, se reunieron altos jefes de las Fuerzas Armadas, y entré ellos, el general de brigada Alfredo Canales Márquez y el contralmirante Horacio Justiniano. El general Canales, muy borracho, confidenció a Justiniano que «tenemos en la sartén al hijo de puta». «Hijo de puta», en el lenguaje del señor general, quería decir «el Presidente de la República». Y agregó: «Este mes lo cagamos». El contralmirante Horacio Justiniano quedó muy preocupado, porque él nada sabía de que se proyectara un golpe militar. Ya en Santiago, le preguntó al general Prats de qué se trataba. Prats consultó con sus generales de la guarnición de Santiago, y éstos llegaron a la conclusión de que Alfredo Canales Márquez era «un peligro para la seguridad de las Fuerzas Armadas» al hablar así cuando se emborrachaba. El cuerpo de generales estuvo de acuerdo en que no se podía realizar «una planificación adecuada para vencer al enemigo (el Gobierno de Allende) atacándolo oportunamente y valiéndonos de sus debilidades, si hay personal nuestro que lo pone sobre aviso».

La reunión de los máximos mandos del Ejército en Santiago se había hecho sin la presencia de Canales Márquez, y allí se acordó llamar a retiro al general para evitar el alerta en el Gobierno. Se estuvo de acuerdo en «denunciar a Canales ante el presidente Allende» y decirle que el SIM había descubierto a tiempo el complot, el cual no tenía ramificaciones serias. Con eso, dijeron los generales, «continuamos haciendo confiar a Allende en nosotros, y podremos seguir a la expectativa de los hechos, sin interferir con las maniobras de los partidos políticos para sacar a Allende del Congreso». A Canales, los generales le dieron la explicación de que había sido el propio presi-

dente Allende quien había llamado a Prats para denunciarle el comportamiento de Canales en la unión social de Viña del Mar, y había exigido su retiro de las filas.

Esto fue lo que el 14 de septiembre de 1972 denunció públicamente Salvador Allende como «el plan septiembre» para «derrocarlo». Se basó en las informaciones que el general Prats le había llevado. Pero lo que Allende no sabía era que en verdad había un plan, pero en octubre.

Octubre de 1972

En ese plan, planificado por la Sociedad de Fomento Fabril, y febrilmente apoyado por la CIA, no figuraban las Fuerzas Armadas. Era una conspiración civil para detener al país, ponerlo al borde del colapso total y obligar con ello a renunciar a Allende, tras perder un plebiscito que debía convocar como única manera de sacar al país de la paralización. La SOFOFA y la CIA estimaban, en septiembre, que octubre era una buena fecha porque ya la situación de «enflaquecimiento del apoyo popular al Gobierno es mucho, por las alzas, colas para comprar alimentos, escasez de todos los productos y la inoperancia del Gobierno».

El día 10 de octubre, a propósito de un proyecto del Gobierno de formar una compañía estatal de transporte camionero en la provincia de Magallanes, el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, León Vilarín (hombre ligado al «sindicalismo libre» de los Estados Unidos), paraliza a sus asociados en todo el país «en señal de protesta contra la dictadura estatal marxista». Se pliegan a su paro la Confederación del Comercio Detallista, dirigida por Rafael Cumsille (democratristiano del equipo de Frei), «en defensa de la libertad de trabajo», y lo siguen la Asociación de Dueños de Microbuses y Taxibuses de la Locomoción Colectiva Particular (dirigida por democratristianos), Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Agricultura, Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, Colegio de Abogados, Colegio de Ingenieros y Colegio Médico. Se suman técnicos y empleados de algunos bancos comerciales todavía no estatizados... En suma, todos los empresarios privados del país, la mayoría de los profesionales y un pequeño sector de empleados se declaran en paro indefinido y levantan como bandera lo que llaman «el pliego de

Chile». El «pliego» contenía exigencias políticas de variado orden, pero su esencia era destruir todo lo avanzado en la aplicación del programa de la Unidad Popular.

El presidente Allende nombra «interventor» en la locomoción colectiva de Santiago al general de brigada Herman Brady Roche, director de la Academia de Guerra. El general Brady, del grupo de los «reformistas», hace todo lo necesario que, al revés de lo que le pedía Allende, los microbuses y taxibuses no se pongan en movimiento. Alega que hay tres mil quinientos vehículos de ese carácter en Santiago, que la guarnición de la capital tiene menos de siete mil hombres, y como tendría que poner un soldado en cada microbús y taxibús para que pudiera trabajar protegido de los sabotajes de los comandos fascistas, haciendo dos turnos de ocho horas tendría que ocupar siete mil soldados solamente en eso, dejando sin guarnición militar la ciudad. La excusa era esa, pero la verdad era otra.

El general Brady estaba recibiendo instrucciones de su grupo de generales «reformistas» para «dejar que Allende se ahogue solo». «No le demos apoyo de ningún tipo, pero sin que se note.»

Pero, de improviso, comenzó a surgir un personaje que ni los miembros de la Sociedad de Fomento Fabril, ni la CIA, ni los generales de las Fuerzas Armadas habían tomado en cuenta. Ocurre que mientras los parlamentarios demócratacristianos y nacionales, a través de las radios y diarios con ediciones extra, vociferaban todo el día que «el país ha caído en un colapso», «todo Chile está detenido», «los trabajadores exigen que Allende renuncie o llame al plebiscito», en las calles, caminos, asentamientos campesinos, fábricas, oficinas públicas y poblaciones se comienzan a ver camiones transportando carga, vehículos llevando pasajeros, miles de obreros, silenciosos, con los puños cerrados y la mirada hosca, caminando por las calles hacia su trabajo todos los días; máquinas funcionando, arados labrando la tierra. En suma, el país caminando. Caminando a medio tranco, es cierto, pero caminando. Todos los patrones en sus casas y los trabajadores haciendo caminar las fábricas. Todos los grandes dueños de la tierra en la ciudad y los campesinos haciendo germinar la tierra.

Comenzó a verse una movilización popular gigantesca. Obreros, campesinos y empleados, reforzados por los estudiantes, salieron a combatir el paro patronal.

El Gobierno había decretado zonas de emergencia (control

militar) en las veinticinco provincias de Chile, pero no se veía ni un solo soldado allanando casas de patrones para obligarlos a ir a trabajar. Sin embargo, se veían miles de obreros trabajando. A medias, es cierto, porque tenían que formar brigadas de choque para repeler los criminales atentados de los fascistas. Pero impedían el colapso económico.

En las barriadas industriales de Santiago, comenzaron a aparecer con personalidad propia los llamados «cordones industriales». Se habían comenzado a formar en junio de ese mismo año, llevados por la necesidad de combatir de alguna manera el sabotaje patronal, el mercado negro, la especulación y la escasez de materias primas industriales. Habían nacido como «organizaciones de trabajo, comercio, planificación laboral y defensa contra los enemigos de clase» en la zona industrial de Los Cerrillos, al sudoeste de Santiago. Habían sido vilipendiados por algunos políticos de los propios partidos de la Unidad Popular, calificándolos de «organizaciones extremistas contrarrevolucionarias» manejadas por «ultras».

Ahora, en octubre, mostraban su fuerza. Hacían caminar la industria, ocupaban los monopolios industriales, y sin patrones, sin técnicos, sin gerentes, los hacían caminar. Hacían asambleas y se discutía esto: «¿Qué plazo les fijamos a los momios (reaccionarios) para que vuelvan a trabajar?» O también: «Debemos organizarnos en brigadas armadas populares para derrotar definitivamente a nuestros enemigos... Los militares están ayudando a los patrones con su pasividad... El problema tenemos que resolverlo nosotros mismos, el pueblo».

Los Servicios de Inteligencia del Ejército, la Marina y las Fuerzas Aéreas recibían informes diarios sobre la «movilización popular.» Y también otro tipo de informes. Informes internos de «las instituciones». Con el espectáculo del país funcionando sin empresarios, sin patrones, algunos mandos militares habían expresado, admirados: «Estos rotos se la pueden», o algo más específico: «El Gobierno de Allende nos merece respeto... Está haciendo algo extraordinario.»

Es decir, la puesta en tensión de todas las fuerzas durante el desarrollo del «plan octubre», había dejado al descubierto la existencia de un grupo de mandos militares «simpatizantes de Allende». La situación era grave para quienes habían pensado que había total coherencia ideológica en la estructura militar.

Y se hacía más grave si, como lo señalaban los informes del SIM, había «un número cercano a los ochenta mil obreros movi-

lizados sólo en la provincia de Santiago». Era como para pensar: ochenta mil obreros en ánimo de combate, con una guarnición militar de cinco o seis mil hombres.

Los generales «reformistas», «duros» y «constitucionales» se reunieron para fijar «una táctica para el difícil momento». Se llegó a un acuerdo general de «apoyar a Allende para una salida política». ¿Por qué? Porque de ese modo se puede «detener a tiempo la furia popular», la cual las fuerzas armadas «difícilmente podrán destruir sin entrar en una guerra civil prolongada, de desgaste», que dejaría al aparato militar, aun en el caso de vencer, semidestruido e inerte «frente a sus enemigos externos», y fácilmente «vulnerable frente a los enemigos internos»; porque la economía está tan deteriorada que si sumamos el efecto del actual paro al que vendría con una guerra civil, «nos desmoronaríamos», pasando a ser «los parias de América Latina» y «nuestro país se desmembraría»; porque los políticos civiles «se han demostrado incapaces de obligar a Allende a renunciar».

Al mismo tiempo, los oligarcas de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, viendo el mismo paisaje de movilización popular, y siendo testigos de la «pasividad» de las Fuerzas Armadas, instruyeron a sus políticos para que buscaran una «salida política de transacción», abandonando la meta, por ahora, de derrocar a Allende.

En el Gobierno, por consejo de algunos dirigentes del partido socialista, se le sugiere a Allende que nombre un Gabinete que tenga al general de Ejército y comandante en jefe Carlos Prats González como ministro del Interior (cargo equivalente a vicepresidente de la República), para dar una imagen de fuerza y de «apoyo al Gobierno» de las Fuerzas Armadas.

Se hace la proposición al general Prats, éste consulta con sus generales y con los mandos superiores de la Marina y la Fuerza Aérea, y se llega a la conclusión de que la proposición es buena porque permite las alternativas siguientes: Controlar desde el Ministerio del Interior (a cargo de todo el aparato policial chileno) las actividades de los trabajadores y sus organizaciones «no clásicas», a fin de estudiarlas con precisión; avanzar en la tesis de los generales «constitucionalistas» de llegar a formar un Gobierno Allende-FF.AA.; dar un respiro a una situación crítica en grado máximo, para llegar hasta las elecciones generales de parlamentarios de marzo de 1973, que son una «oportunidad

absolutamente constitucional» de destituir constitucionalmente a Allende y reemplazarlo por un «demócrata probado»; tener tiempo para «revisar los mandos de las instituciones», puesto que habían sido detectados «focos de opinión extremista» entre ellos, y cambiarles destinación, quitándoles mando de tropa a los que lo tuvieran; fijar una táctica adecuada al momento para la idea general de los altos mandos militares de «prepararse para gobernar el país».

Sin embargo, estos razonamientos no les fueron comunicados a los cómplices del «plan octubre», Eduardo Frei y Onofre Jarpa, principales interesados en fomentar un golpe militar que pudiera conducir, a uno de ellos, a la presidencia. A estos políticos se les explicó que las Fuerzas Armadas no estaban todavía en situación de manejar el país, y por eso no habían podido hacer nada en el paro.

El 2 de noviembre, Allende anuncia cambio de Gabinete: ministro del Interior, el general comandante en jefe del Ejército Carlos Prats González; ministro de Obras Públicas, el contralmirante Ismael Huerta; ministro de Minería, el general de la Fuerza Aérea, Claudio Sepúlveda.

El 5 de noviembre, Allende sale por dos semanas del país, en gira a Argelia, URSS, Marruecos y Cuba, y cortas estancias en Caracas y Lima. Queda como jefe de la nación el general Prats. Cuando Allende regresa Prats le entrega el mando constitucional. Parecía el mejor momento de seguridad para el Presidente y, sin embargo, no lo era.